

¿Crisis económica o crisis de convivencia?

La crisis económica mundial entra ya en su octavo año si colocamos su origen en el otoño de 1973, cuando se produce el primer drástico aumento del precio del petróleo. Según algunos indicadores económicos, no se puede afirmar que la crisis haya sido continua durante todo ese período, porque en 1976 se produjo una rápida recuperación del crecimiento del PNB en los países de la OGDÉ, que continuó hasta 1979, cuando se inició la siguiente ola de aumentos de precio de los crudos. Pero es innegable que desde 1973 ya nada es igual en el mundo industrializado y que aunque no fuera posible saber el momento preciso ni el montante exacto del nuevo incremento del precio del petróleo, ese incremento formaba parte de las expectativas de los agentes económicos y contribuía a un pesimismo que ahora se ha agravado, pero nunca había desaparecido.

El objeto de este trabajo es analizar las causas de la crisis en el pasado y los factores que pueden incidir en ella en el futuro. Se analizará también la respuesta de los países industrializados en términos de políticas económicas y de comportamientos sociales y se intentará enjuiciar la prospectiva de estos países para el resto de la década de los ochenta.

El mundo es un todo cada vez más indisoluble y la crisis energética ha afectado a la totalidad de nuestro planeta. Pero existen al menos cuatro grandes categorías de países y un número importante de casos particulares. Las cuatro principales categorías podrían ser: los países exportadores de petróleo, los países subdesarrollados no productores, los países desarrollados con economía de mercado y los países desarrollados con economía planificada. Los problemas de cada una de esas categorías son lo suficientemente distintos como para que merezcan un análisis separado. El objeto de este ensayo es tratar de la crisis económica en los países industrializados con economía de mercado, que para simplificar denominaremos en adelante «países de la OCDE». Será necesario considerar brevemente la situación de los países exportadores de petróleo en tanto en cuanto afecte a la de los países de la OCDE, y sólo aludiremos de paso a los dos grupos restantes. El bloque soviético dispone de reservas energéticas importantes, pero no afectará sustan-

cialmente al balance energético del resto del mundo (aunque las exportaciones de gas soviético y de carbón polaco pueden tener una incidencia marginal en el aprovisionamiento de Europa Occidental). China parece también disponer de fuentes de energía considerables, que reservará sin duda para su propio consumo, aunque también en este caso pueda marginalmente incidir en los aprovisionamientos de Japón. En lo que respecta al impacto económico general de estos países, su tendencia a la autarquía disminuye considerablemente ese impacto y puede considerarse que no afecta globalmente al análisis económico que aquí haremos.

El caso de los países subdesarrollados no exportadores de petróleo es distinto, porque en esos países vive la mayor parte de la población mundial, que además crece continuamente, y porque independientemente de los productos energéticos allí se produce también una parte importante de las materias primas que consume la OCDE. Pero aunque la suerte de esos países tenga un gran interés en sí, su impacto sobre el área de la OCDE en la década de los ochenta no será muy distinto del que ha sido hasta ahora. La escasez global de materias primas es un peligro mucho más lejano de lo que pretendía el primer informe del Club de Roma ^{*}, suponiendo que alguna vez pueda producirse, y las probabilidades de un enrarecimiento artificial de la oferta por la vía del oligopolio, como ha ocurrido con la OPEP, parecen mínimas. Por otra parte, está apareciendo cada vez más claramente que ese grupo sólo puede definirse residualmente, pero en realidad la noción de «tercer mundo» es extremadamente inestable. Por una parte, toda una serie de países van despegándose del grupo y terminarán ingresando en la OCDE (Corea del Sur y Brasil, por ejemplo). Por otra, es imposible confundir los problemas de Asia del Sur (con elevada y creciente densidad de población y escasez de materias primas) con los de África (baja densidad de población, relativa abundancia de materias primas, pero enormes problemas de adaptación cultural al mundo industrializado) o con los de Iberoamérica, que tiene cada vez más probabilidades de ser el continente del futuro, porque su densidad de población es baja, tiene abundantísimas materias primas y la influencia étnica y cultural ibérica le permite una gran adaptación a la civilización industrial.

Concentrándonos, pues, en el ámbito de la OCDE, analizaremos sucesivamente las siguientes cuestiones:

- situación anterior a la crisis energética;
- causas y efectos de la crisis energética;
- las políticas económicas de cara a la crisis;
- análisis prospectivo.

¹ D. Meadows y otros, *The limits to growth*, París, 1972.

Situación anterior a la crisis energética

Atribuir a la crisis del petróleo la causa de todos los males que están viviendo los países industrializados es una forma fácil de rehuir responsabilidades, pero no corresponde en absoluto a la realidad de los hechos. Cuando irrumpió la primera ola de aumentos del petróleo en 1973, la OCDE estaba entrando en una fase de recesión como consecuencia de las políticas económicas restrictivas que estaban aplicando la mayor parte de los países para luchar contra una inflación que se había disparado. Después de veinte años de crecimiento económico con relativa estabilidad de precios, los países de la OCDE habían visto resurgir el fantasma de la inflación en el último tercio de la década de los sesenta. La OCDE fue uno de los primeros organismos en percatarse del peligro y publicó un estudio en 1970 que distaba de ser optimista sobre las perspectivas futuras². El propio autor de estas líneas contribuyó en 1973, justo antes de que estallara la crisis del petróleo, al análisis del fenómeno en un libro titulado *Economía de la inflación*, y publicado por el Instituto de Estudios Fiscales. Ese análisis sigue siendo válido, porque la crisis del petróleo se ha superpuesto a una situación ya de por sí cargada de peligros y que en gran medida perviven.

En un artículo titulado *Can liberalism survive inflation?*, y que debe traducirse en términos españoles por «¿Puede la socialdemocracia sobrevivir a la inflación?»³, el profesor Alfred Kahn, asesor del presidente Cárter, analiza las razones del fracaso de la Administración Cárter. Ese análisis es extra-polable a la evolución que han seguido las economías europeas bajo sistemas de gobierno esencialmente socialdemócratas, y por eso vale la pena resumirlo aquí. El propio Kahn, en su introducción, dice que los socialdemócratas «deberán empezar a reflexionar sobre qué políticas se justifican en la década de los ochenta y, en cambio, qué ideas preconcebidas, remedios o *slogans* de los años treinta hasta los sesenta deberán abandonarse».

El análisis de Kahn parte de una premisa básica: la reaparición durante los años sesenta de la «economía de la escasez», es decir, un desequilibrio cada vez mayor entre las demandas de la sociedad sobre su economía y la capacidad que tiene ésta para satisfacerlas. Evidentemente, dice Kahn, en una situación de escasez sólo pueden aplicarse dos soluciones: restringir la demanda o aumentar la oferta, y a ambas han sido siempre reacios los socialdemócratas. Las restricciones de demanda siempre hacen más daño a las clases modestas y suelen ser un remedio preconizado por los conservadores. El aumento de la oferta significa igualmente aumentar el ahorro, el esfuerzo y los beneficios, todo ello generalmente en provecho de las clases más favorecidas (aunque después redunde en beneficio de las otras). En cualquier caso,

² *Inflation. The present problem*, París, 1970.

³ Como es sabido, la palabra *liberalism* se utiliza en los Estados Unidos para definir un progresismo relativamente intervencionista que corresponde plenamente con la socialdemocracia española. El artículo fue publicado en el número del 7 de mayo de 1981 de *The Economist*.

las izquierdas siempre han sido más favorables a repartir lo que se produce que a crear las condiciones necesarias para que la producción aumente.

Kahn añade un punto que, en mi opinión, se acerca más al meollo del problema: las cuatro últimas décadas del capitalismo han conducido a la inflación precisamente como consecuencia de su creciente humanización. El «Estado beneficencia», al proteger al pueblo de los rigores y la inseguridad del mercado, le ha evitado también disciplinas tales como el paro que sigue inevitablemente a peticiones excesivas de salarios, la quiebra que resulta de aumentos no competitivos de precios o la pobreza en la tercera edad, que es consecuencia de no haber ahorrado en la juventud. La fábula de la cigarra y la hormiga se ha ido corrigiendo cada vez más a favor de la cigarra.

Esta autocrítica de un socialdemócrata merece reflexión. Recordemos que el keynesianismo aparece en una época en la que la cuarta parte de la población activa de los países industrializados llegó a estar parada. Vino después la guerra, con su innegable impacto igualitario, y una posguerra en la que el voluntarismo estatal era una consecuencia casi inevitable de la necesidad de reconstruir, de progresar, de asegurar a toda la población unos mínimos por los que había combatido. Si la democracia se reflejó en la Revolución francesa en un grito de «libertad, igualdad, fraternidad», parecía lógico que la consecución de la libertad llevara a un acercamiento cada vez mayor a la igualdad. Pero al mismo tiempo se estaba perdiendo la fraternidad. El crecimiento económico llevaba a una urbanización creciente, a una pérdida de las raíces culturales más profundas, a un intento de conseguir la felicidad por la vía de la satisfacción material. La tendencia al consumismo aumentaba (es cuando Galbraith escribe su *Affluent Society*), y para ello era necesario mantener un incremento rápido de las rentas que permitiera ese aumento continuado del consumo.

Aquí entramos en una primera contradicción. Ante unos recursos necesariamente limitados es posible mantener determinados incrementos del consumo de bienes privados si se sacrifica el consumo de los llamados bienes públicos, normalmente prestados por la colectividad. Pero la ola progresista que invade la mayor parte de los países occidentales exige cada vez más prestaciones de tipo social, en materia de educación, de sanidad, de medio ambiente o de pensiones para la vejez. La participación del Estado en el total de los recursos disponibles aumenta con gran rapidez, acercándose al 50 por 100 en muchos países occidentales. Ese nivel de participación parece justificado para muchos políticos e intelectuales del momento por la necesidad de llegar a una mayor equidad en la distribución de la renta y de la riqueza, de iguales oportunidades y de asegurar unos niveles mínimos de bienestar a todos los grupos sociales. Sin entrar en una argumentación de fondo sobre la mayor o menor justificación de tales demandas, es innegable que son contradictorias con la demanda popular, igualmente fuerte, de mayores niveles de consumo. Llegamos así al concepto que aparece en los años sesenta, de *tax-push inflation*, o inflación provocada por los impuestos. Quienes preconizan una mayor participación del sector público en el gasto nacional lo hacen inicialmente

partiendo de la base de que los impuestos progresivos sobre la renta afectan exclusivamente a las clases más favorecidas. Pero a medida que resulta necesario financiar más gastos y que la progresividad de los impuestos choca con un techo imposible de sobrepasar, se va haciendo cada vez mayor la presión fiscal sobre las clases medias y por fin sobre las más modestas. Se produce entonces una reacción de unos y otros, que intentan traspasar a los demás el mayor coste impositivo exigiendo aumentos de remuneraciones. En una situación de pleno empleo como la que conocen los países occidentales durante la década de los sesenta, esa lucha por incrementar la participación en el pastel de cada grupo social conduce a una inevitable espiral inflacionista.

La segunda contradicción se produce en parte como consecuencia de la primera y en parte por factores autónomos. Como hemos dicho anteriormente, en períodos de escasez debe restringirse la demanda o la oferta. Al producirse las tensiones inflacionistas antedichas es inevitable una primera reacción de restricción de demanda por parte de las autoridades económicas. Esa restricción no afecta casi nunca al gasto público, que tiene una dinámica propia difícil de contener a corto plazo, al menos en el contexto ideológico de esa época. El resultado es que el componente de la renta más afectado por la pugna inicial y por las medidas correctoras son los beneficios, y como consecuencia de ello el componente del gasto más afectado es la inversión privada. A ello se añade una tendencia secular a la disminución de los incrementos de productividad, así como una disminución del crecimiento de la población activa en la mayor parte de las sociedades occidentales. En otras palabras: cada vez es menor la proporción de personas que producen en relación con las que gastan.

La cuestión de la productividad ha hecho correr mucha tinta, y se debe a un conjunto de factores diversos. Entre los más importantes figura sin duda la desaparición de una de las causas que más contribuyeron al desarrollo de la productividad en el pasado: los cambios en la estructura del empleo a favor de sectores con alta productividad. El trasvase de población de la agricultura a la industria y a los servicios cesó prácticamente en la década de los sesenta y dejó de contribuir al aumento de la productividad media del sistema. Pero conviene aclarar ese concepto antes de proseguir para comprender otro de los factores que igualmente inciden a la baja. La agricultura era, en los años de la inmediata posguerra, el sector con más baja productividad en términos absolutos, es decir, con menor producción por persona empleada en el sector. Durante las dos décadas siguientes el crecimiento de la productividad agrícola fue muy elevado en la mayor parte de los países, siendo en casi todos los casos superior al crecimiento de la productividad en el conjunto de los restantes sectores de la economía y en particular al del sector servicios, cuyo crecimiento ha sido siempre lento. Sin embargo, al ser las remuneraciones en este último sector mucho más altas que en la agricultura, también lo era la productividad tal como normalmente se define. Por esa razón, el trasvase de población del sector primario al sector terciario incrementaba la productividad media, aunque en este último sector la productividad creciera lentamente.

Ahora bien: una vez culminada la etapa de grandes cambios en la estructura de la población activa y consolidado el porcentaje de población que permanecía en el sector primario, ya no se producía el incremento medio de productividad por simple trasvase, y pesaba en cambio a la baja el hecho de que el sector mayoritariamente más importante en cuanto al empleo era también aquel en que la productividad crecía menos. El incremento del ocio y de las actividades educativas o sanitarias ha llevado inevitablemente a las economías avanzadas a una situación en la que los crecimientos espectaculares de productividad de épocas anteriores no podía continuar. Ello, dicho sea de paso, ha sido uno de los factores que más han contribuido a la aceleración secular de la inflación. En general, los salarios se han incrementado en función de los incrementos de la productividad en los sectores de más rápido crecimiento, como el industrial. Al no admitir el sector terciario una disminución de sus diferenciales de renta con relación al sector servicios, ha exigido incrementos en sus rentas (tanto salariales como de otro tipo) en la misma proporción. Como la productividad, en cambio, no aumentaba al mismo ritmo, el sector terciario ha ido aumentando sus tarifas y contribuyendo así mucho más que ningún otro a la inflación. En la década de los sesenta, más del 70 por 100 del incremento total de los precios en los principales países de la OCDE se debió al sector servicios.

Otro factor que se menciona a menudo como una de las causas de la desaceleración en el crecimiento de la productividad es el de la creciente intensidad en capital de la inversión. En los años cincuenta, pequeñas inversiones combinadas con cambios en la organización del trabajo permitían conseguir aumentos importantes en la productividad de este factor. Al terminar los sesenta, esas inversiones eran cada vez más importantes y los resultados cada vez menores, quizá como consecuencia de un techo tecnológico temporal.

No se puede negar, por último, el papel que ha desempeñado el cambio de actitud ante el esfuerzo. Aunque el esfuerzo físico es cada vez menos necesario en los procesos de producción modernos, es evidente que la falta de concentración en el trabajo, su interrupción bajo pretextos más o menos fútiles o el absentismo van en detrimento de la productividad, y estos factores, que habían disminuido considerablemente en las economías desarrolladas, han tenido tendencia a incrementarse de nuevo a medida que se alcanzaban cotas de prosperidad mayores y se incorporaban a la población laboral generaciones educadas en un clima de menor esfuerzo y menor consciencia de la escasez.

Sean cuales sean las causas, es innegable que la desaceleración del crecimiento de la productividad, que en economías como la de los Estados Unidos ha llegado a un total estancamiento, ha constituido otra contradicción importante en la evolución de las economías avanzadas. Porque el incremento de la productividad constituye la única base sobre la que pueda asentarse un crecimiento sostenido de las remuneraciones en términos reales. Y como las demandas para que ese crecimiento de remuneraciones continúe no sólo no han cesado, sino que se han incrementado, el resultado ha sido una mayor inflación.

Nos encontramos, pues, para resumir, con una primera contradicción entre las demandas para un crecimiento del consumo privado y las de una mayor satisfacción de necesidades colectivas o bienes públicos. A ésta se añade una segunda contradicción entre esos deseos de un mayor incremento del gasto, que se traducen en una presión para el incremento de las rentas personales a costa de los beneficios, y del consumo, a costa del ahorro y la inversión, que conducen a su vez a un menor crecimiento de la productividad y, a fin de cuentas, de la producción.

La tercera contradicción aparecerá en toda su magnitud con ocasión de la crisis del petróleo, pero ya empieza a vislumbrarse anteriormente. Es la que existe entre unas economías avanzadas cuyas poblaciones han alcanzado niveles de vida insospechados hasta entonces en la historia de la humanidad y las economías del tercer mundo, cuyas poblaciones crecen sin cesar, pero que en su mayoría no consiguen superar niveles de pobreza extremos. Hemos dicho con anterioridad que no entraríamos en el análisis de la situación del tercer mundo, pero sí conviene anotar aquí que las contradicciones internas a las que hemos hecho alusión en párrafos anteriores se han vencido en parte merced a la agravación de una contradicción externa, puesto que globalmente los términos de intercambio evolucionaron a favor de los países desarrollados durante el cuarto de siglo que siguió a la guerra mundial. Dicho en otras palabras: los conflictos por la distribución de la renta entre los distintos grupos sociales en las economías avanzadas se resolvían en parte gracias al aprovisionamiento en energía y materias primas cada vez más baratas en términos comparativos.

A riesgo de simplificar excesivamente el análisis, intentaremos concluir esta sección con un diagnóstico de la situación de las economías avanzadas al finalizar la década de los sesenta y antes de que estallara la crisis del petróleo. Después de un cuarto de siglo de crecimiento ininterrumpido, las sociedades occidentales han compensado con creces los estragos de la Segunda Guerra Mundial y han alcanzado cotas de bienestar (medido en términos económicos) nunca conseguidas anteriormente. Y, sin embargo, el proceso lleva consigo los gérmenes de su propia destrucción. Podríamos para describirlo utilizar literalmente frases escritas por Schumpeter cuando el mundo se encontraba en la crisis económica más grave de la historia moderna:

«El capitalismo está en crisis. Confrontados con una hostilidad cada vez mayor de la sociedad en la que viven, los empresarios y los capitalistas están perdiendo confianza en los valores fundamentales del sistema. Sociológicamente, el ejecutivo está suplantando al empresario. Económicamente, las oportunidades de inversión rentable disminuyen. Políticamente, la burguesía ya ni se atreve a defender abiertamente su ideología, porque ha dejado de creer en ella. Una ventaja innegable del estado burgués era la democracia. Sin embargo, la democracia burguesa está funcionando con fricciones cada vez mayores, porque el método democrático burgués no puede funcionar bien en una sociedad carente de consenso. Dada esta situación, la única respuesta a los

problemas de la sociedad actual que combine un grado de eficacia económica con la existencia de una auténtica democracia es el socialismo.»

El gran Schumpeter no había previsto, evidentemente, que, pasada la Gran Depresión y una conflagración mundial, las economías occidentales iniciarían un nuevo y floreciente período de crecimiento, mientras los regímenes socialistas se hundían en las contradicciones del totalitarismo burocrático. Pero es innegable que la situación en que se iniciaba la década de los setenta no permitía proseguir un modelo de crecimiento que estaba alcanzando sus límites. Contrariamente a las previsiones del Club de Roma, esos límites no eran físicos. Ni ha existido en ningún momento insuficiencia global o parcial de materias primas ni la crisis energética se debe, como veremos más tarde, a una escasez física, sino a un enrarecimiento artificial de la oferta. Pero sí parecen haberse alcanzado límites sociológicos. Por una parte, a los aumentos de nivel de vida medidos en términos económicos no parecen haber correspondido aumentos equivalentes en términos de bienestar. Ello puede haberse debido en parte al proceso de urbanización, a una organización deshumanizada del trabajo, a un cambio tecnológico quizá demasiado rápido para poder ser asimilado en una generación. El caso es que índices no económicos de bienestar, como pueden ser la seguridad ciudadana, la calidad del medio ambiente o la salud psíquica, se han deteriorado de forma alarmante. En términos económicos, la inflación ha sido, contrariamente a teorías simplistas tanto de marxistas como de liberales decimonónicos, un síntoma muy claro de esa crisis sociológica. En el título de este ensayo la hemos calificado de «crisis de convivencia», porque esa palabra nos ha parecido resumir mejor que otras un fenómeno profundamente complejo que, como veremos, la crisis del petróleo no ha hecho más que agravar.

Causas y efectos de la crisis energética

No correspondería en absoluto al objeto de este ensayo analizar con detalle la situación energética mundial, que está suficientemente documentada en numerosos trabajos. Sin embargo, la información que se ha difundido en medios no profesionales ha sido lo suficientemente tendenciosa como para que merezca un breve comentario. Un dato que ha sido sistemáticamente manipulado es el de las reservas comprobadas de petróleo, que se cifraban en unos treinta años de consumo para justificar previsiones apocalípticas de escasez a corto plazo. En un libro publicado como reacción al primer informe del Club de Roma, y titulado *In Defence of Economic Growth*, Wilfred Beckerman, profesor de Economía política en la Universidad de Londres, cita numerosos ejemplos de predicciones hechas en el pasado sobre el agotamiento de recursos naturales. Un ejemplo interesante es el del estaño, para el que se estimaban en 1929 reservas de sólo diez años de consumo. Cuarenta años después, el Club de Roma cifraba las reservas mundiales de estaño en un máximo de quince años de consumo. Ya han pasado diez años y, que se sepa, no se

está acabando el estaño. Hay numerosas razones para que las *reservas comprobadas* de petróleo no sobrepasen los treinta años. La más importante es que ninguna compañía ni ningún Estado van a hacer las cuantiosas inversiones necesarias para comprobar detalladamente reservas estimadas mientras dispongan de reservas comprobadas para tantos años. Por eso, a medida que se van agotando los yacimientos existentes, van apareciendo nuevos. Otra razón es que ni a las compañías petrolíferas ni a los grandes Estados productores les ha interesado demostrar que las reservas eran muy abundantes o difundir lo que equivale a secretos estratégicos importantes. México sabía mucho antes de que ello saliera a la luz pública que disponía de reservas importantísimas, y en la actualidad sigue infravalorándolas considerablemente. En Irak se cree que las reservas reales son muy superiores a las contabilizadas. En Arabia Saudita consideran ya suficientemente comprometida la enorme cifra de sus reservas oficiales como para ir explorando más, y en lo que concierne a la Unión Soviética, la CÍA acaba de revisar al alza estimaciones que los soviéticos no publicarán nunca con veracidad. Un tercer factor, quizá más importante que los anteriores, es que la cifra de reservas está directamente ligada al precio, puesto que lo que importa son las cantidades económicamente explotables. Al haberse multiplicado el precio de los crudos por un factor superior a 20, en ocho años es evidente que la cifra real de reservas recuperables habrá aumentado mucho, aunque de momento no se refleje en la cifras publicadas.

Más tarde aludiremos a las estimaciones que nos parecen más fiables sobre los principales recursos energéticos. De momento volveremos a la situación que precedió a la ola de aumentos del precio de los crudos en 1973-74. La OPEP existía desde 1973, pero no había conseguido funcionar realmente como un *cartel*, en parte por falta de cohesión entre sus miembros y en parte porque el primer consumidor de petróleo del mundo, los Estados Unidos, era al mismo tiempo el primer productor, y sus importaciones estaban limitadas al 19 por 100 del consumo interior (de los que sólo el 4 por 100 podía provenir de fuentes exteriores al continente americano). Pero a partir de 1972 empiezan a aumentar considerablemente las importaciones de petróleo por parte de los Estados Unidos, y en 1973 estalla la segunda guerra entre Israel y los países árabes. No olvidemos que en aquella época la política americana es casi incondicionalmente favorable a Israel, y que entre las grandes potencias occidentales, sólo Francia se coloca claramente del lado de los países árabes. Los árabes descubren que disponen de un arma poderosísima contra quienes, en su opinión, favorecen indebidamente a su principal adversario. Lo que había empezado como una presión hacia el aumento de precios en 1973 degenera en un embargo con objetivos claramente políticos y termina con unos aumentos de precio que multiplican los precios iniciales en menos de un año.

Se han emitido muchas hipótesis desprovistas de fundamento sobre una eventual responsabilidad de los Estados Unidos o de las grandes compañías petrolíferas americanas en unos aumentos que dañaban sobre todo a Europa

y a Japón. Sin caer en maquiavelismos absurdos, creo que la responsabilidad americana es grande, pero involuntaria. No se puede pretender ser la primera potencia mundial y seguir una política exclusivamente basada en consideraciones internas sin asegurarse algo tan elemental como el abastecimiento energético. Los Estados Unidos eran con muchísima diferencia los primeros consumidores de petróleo del mundo porque no aplicaron medidas fiscales como las que limitaban el consumo en los países europeos y Japón. Por razones también basadas en política interior (el voto judío), los Estados Unidos apoyaron a Israel sin considerar en ningún momento las repercusiones de esa política sobre los países árabes, en los que se encontraba más de la mitad de las reservas comprobadas de petróleo en el mundo. Y, lo que es más grave todavía, por razones también internas, los Estados Unidos se negaron a ajustar sus precios al alza durante muchos años, siendo sólo la reciente Administración Reagan la que ha liberalizado los precios, ajustándolos así a los internacionales.

La consecuencia de todo ello ha sido que las importaciones americanas de petróleo han continuado aumentando hasta 1979, siendo 1980 el primer año en que muestran una disminución importante. Eso ha tenido a su vez consecuencias graves para los restantes países occidentales. La sustitución del petróleo por otras fuentes de energía es un proceso necesariamente muy largo. Una central nuclear tarda más de diez años en construirse. La utilización del carbón implica un largo proceso, que va desde la puesta en marcha de nuevas minas hasta la construcción de nuevas centrales terminas o la transformación de procesos industriales existentes, pasando por la adecuación de los medios de transporte (con ingentes inversiones portuarias, por ejemplo). Por otra parte, los consumos energéticos superfluos eran mucho menores en Europa y Japón que en Estados Unidos. Un primer paso en el proceso de ajuste a la nueva situación energética habría sido mucho más rápido y efectivo disminuyendo y aumentando la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, que eran, repetimos, tanto el primer consumidor como el primer productor de los países occidentales.

Nos hemos extendido en este análisis de la situación americana en materia energética porque creemos que constituye el factor explicativo más importante de esa situación de dependencia en la que se han encontrado las economías occidentales entre 1973 y 1980, sin que en ningún momento haya existido *escasez física* de petróleo. Han existido, en cambio, las condiciones que han permitido a un grupo limitado de países practicar una política oligopolística, que llevó a la multiplicación por 5 del precio de los crudos en 1970-74 y a una nueva multiplicación por 3 en 1979-80.

¿Cuáles han sido los efectos macroeconómicos de esos aumentos? Antes de cuantificarlos convendrá analizarlos desde un punto de vista teórico para comprender mejor en qué aspectos de la economía incide más su importancia cuantitativa.

Se ha dicho a menudo, y con razón, que el aumento de precio de los crudos equivale a un aumento de los impuestos indirectos sobre los países

consumidores en beneficio de los países productores. Efectivamente, al aplicar los países productores un impuesto sobre la producción de un bien que es insustituible a plazo medio en los países consumidores, ello equivale a recaudar directamente el impuesto en dichos países, pero con una diferencia importante en términos de demanda global. En general, cuando un gobierno aumenta los impuestos indirectos en su propio país, el producto de esos impuestos se gasta en un plazo de tiempo relativamente breve y el impacto global sobre la demanda se compensa, puesto que el gasto privado disminuye como consecuencia de la disminución de renta a favor del Estado, pero el gasto público aumenta a menos que el incremento de impuestos se haya efectuado con fines estabilizadores, siendo su contrapartida una disminución del déficit público o la aparición de un excedente. Si lo que ocurre es una simple sustitución de gasto privado por gasto público, la economía no estará globalmente muy afectada, aunque sí pueden verse afectados desfavorable o favorablemente sectores determinados de la economía. Esa redistribución del gasto tendrá también un impacto sobre la distribución de la renta, ya que muy probablemente el aumento de impuesto o la distribución del mayor gasto público resultantes no serán neutros desde el punto de vista de la renta de los distintos grupos sociales. Pero globalmente, y aun siendo conscientes de que esta afirmación es enormemente simplificadora, tanto la renta como el gasto globales no variarán sustancialmente.

En el caso que nos ocupa, de aplicación de un impuesto por un grupo de países a otro grupo, el impacto dependerá también de lo que ocurra con la contrapartida de ese impuesto, es decir, del uso que hagan los países productores de petróleo de sus nuevos ingresos. Supongamos inicialmente que dichos países se gasten esos impuestos en mayores inversiones o mayor consumo de sus poblaciones. Nos encontraremos entonces, desde el punto de vista del gasto a nivel mundial, con una situación parecida a la de un país en el que el Gobierno aumenta los impuestos para aumentar el gasto público. El nivel total de rentas a nivel mundial no habrá cambiado, y después de una serie de complicados ajustes, el nivel total de demanda y, por tanto, de actividad económica tampoco habrá variado. Sí se habrá producido en cambio una redistribución de la renta y de la demanda entre los distintos países. Los países importadores de petróleo se habrán empobrecido y los exportadores se habrán enriquecido como consecuencia de la deterioración de los términos de intercambio de los primeros a favor de los segundos. Pero al gastarse éstos sus rentas más elevadas deberán recurrir a importaciones, que directa o indirectamente redundarán en mayores exportaciones de los países importadores, y en particular de los países desarrollados que tienen capacidad suficiente para aprovisionarles. El resultado global se expresa en el cuadro adjunto bajo la hipótesis A. Los países exportadores de petróleo podrán utilizar su mayor renta para aumentar sus niveles de gasto aun manteniendo una producción que en volumen será la misma. Los países importadores, en cambio, habrán sufrido una disminución de su renta que les obligará a disminuir el volumen de su demanda interior (lo que se ha venido a llamar «apretarse

el cinturón»), pero deberán mantener en cambio sus niveles de producción simplemente para poder abastecer a los países exportadores de petróleo con un mayor volumen de bienes y servicios, recuperando así el equilibrio de la balanza de pagos. En otras palabras: los países importadores de petróleo deberán sustituir demanda interior por exportaciones manteniendo su producción global. Como se ve en el cuadro sinóptico que sigue (hipótesis A), tanto la renta como el gasto y la producción se mantienen invariables a nivel mundial, compensándose el enriquecimiento y el mayor gasto de unos con el empobrecimiento, el menor gasto y el mayor esfuerzo de otros y manteniéndose los volúmenes de producción constantes en ambos grupos. Si añadimos a estas tres variables macroeconómicas el impacto sobre la balanza de transacciones corrientes, constataremos que, pasado un cierto período de ajuste, los déficit iniciales de los países importadores de petróleo desaparecerán al aumentar sus exportaciones de otros bienes y servicios, con lo que se recuperará el equilibrio de las balanzas de pagos y se volverá a alcanzar una situación de equilibrio tanto en términos de renta, demanda y producción como de balanza de pagos.

HIPÓTESIS A

	<i>Gasto</i>	<i>Producción</i>	<i>corriente</i>	<i>Balanza, Renta Empleo</i>	
Exportadores de petróleo	Mayor	Mayor	Igual	Igual	Igual
Importadores de petróleo	Menor	Menor	Igual	Igual	Igual
Total mundial	Igual	Igual	Igual	Igual	Igual

En resumen: en el modelo descrito bajo esta hipótesis, la crisis es pasajera, y nada impide al mundo continuar su marcha hacia adelante, puesto que ninguno de los grandes equilibrios económicos ha sido afectado a nivel mundial.

Lo mismo ocurrirá con el empleo. El hecho de que tanto la renta como la demanda interna disminuyan en los países importadores de petróleo no tiene por qué incidir en sus niveles de empleo, puesto que el volumen de su producción se mantiene plasmándose en mayores exportaciones. Es imprescindible darse cuenta de algo que olvidan la mayor parte de los análisis de la crisis: «apretarse el cinturón» significa reducir niveles de gasto, pero no de producción ni, por tanto, de empleo. Muy al contrario, como veremos más tarde, la única respuesta a la crisis es un aumento del esfuerzo productivo y una reasignación de recursos.

Pero puede producirse, y de hecho se produce, otra situación, representada en el cuadro adjunto como hipótesis B. Si los países productores atesoran los ingresos resultantes del mayor valor de sus exportaciones y se limitan a aumentar sus reservas en lugar de aumentar su gasto, el impacto sobre los

países importadores será mucho más negativo. A nivel de rentas, el impacto global inicial será el mismo, puesto que el enriquecimiento de unos será compensado por el empobrecimiento de otros. Pero a nivel de gasto y de producción será muy distinto, puesto que los países importadores de petróleo no aumentarán su gasto, y ello impedirá a los países importadores de petróleo aumentar sus exportaciones de otros bienes y servicios para corregir su déficit de balanza de pagos. Como consecuencia de ello, no aumentará la producción de los países importadores de petróleo y disminuirá el empleo. En cuanto a la balanza de pagos, no será posible compensar el déficit inicial, por lo que los países exportadores de petróleo mantendrán un excedente y los importadores un déficit.

HIPÓTESIS B

			<i>Gasto</i>	<i>Producción</i>	<i>corriente</i>	<i>Balanza Reñía</i>	
						<i>Empleo</i>	
Exportadores de petróleo	Mayor	Igual	Igual	Mayor	Igual
Importadores de petróleo	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
<u>Total mundial</u>			<u>Menor</u>	Menor	Menor	Total	Menor

Este modelo no produce una solución sostenible a largo plazo porque a los países importadores les resulta imposible mantener indefinidamente el déficit corriente. Verdad es que, a corto y medio plazo, el problema de la balanza de pagos es menos grave de lo que podría parecer. Los países exportadores de petróleo reciben, como contrapartida a sus excedentes corrientes un pago en divisas, que no es otra cosa que un pasivo monetario o financiero de los países desarrollados. Los mercados financieros internacionales, y en particular los Euromercados, se encargan de redistribuir dicha financiación en condiciones que dependen de la situación económica de cada país importador, y en la práctica lo han hecho con una gran eficacia. Desde un punto de vista puramente teórico, se puede incluso argumentar que los países productores de petróleo no hacen más que sustituir un activo físico (el petróleo, que como no es un bien reproducible debe más bien considerarse como un activo) por activos financieros. Sin embargo, como veremos, los déficit de los países importadores son tan elevados que no parece razonable imaginar que puedan mantenerse mucho tiempo. Esa es una de las principales razones por las que esta hipótesis no puede considerarse como de equilibrio y dé lugar a ajustes ulteriores, que consisten fundamentalmente en la aplicación de políticas económicas restrictivas destinadas a reducir más aún el nivel de la demanda interior, restableciendo así el equilibrio de la balanza de pagos. En realidad, ese restablecimiento es casi imposible en este modelo, puesto que el conjunto de los países importadores no puede reducir de forma suficiente su consumo de petróleo, que es casi el único producto que importa del bloque exporta-

dor de petróleo. Un país en concreto puede mejorar su balanza corriente a costa de los demás, pero el conjunto de los países importadores de petróleo no puede en un plazo muy largo de tiempo disminuir de forma significativa su déficit corriente si, como suponemos en esta hipótesis, no aumentan las importaciones de los países productores de petróleo. El modelo puede conducir a gravísimos desequilibrios, del tipo de los que se produjeron durante la Gran Depresión, si cada país intenta encontrar el equilibrio a costa de los demás, sea mediante reducciones sucesivas de su demanda interior o mediante devaluaciones competitivas (las llamadas políticas de *beggar thy neighbour*). Otro factor que complica la situación, tanto en la hipótesis A como en la B, es el de la inflación causada por el aumento de precios del petróleo. Es evidente que el aumento inicial del precio de los crudos importados se traduce en un aumento del nivel general de precios en los países importadores. Si ese aumento no se viera compensado en los índices salariales o en otro tipo de rentas, se consolidaría así la pérdida de rentas en términos reales a la que hicimos alusión anteriormente y la inflación no se prolongaría. Pero si los distintos grupos sociales intentan compensar esa pérdida de nivel de vida mediante un aumento de sus remuneraciones, lo único que conseguirán será iniciar una espiral inflacionista, que constituirá también un argumento a favor de políticas de restricción de la demanda.

Pasemos ahora a analizar la evolución real de la crisis en ese contexto teórico. La realidad se ha situado en una posición intermedia entre la hipótesis A y la hipótesis B. Muchos países exportadores de petróleo, como Irán, Irak, Libia, Argelia, Nigeria o incluso Venezuela y México, han demostrado tener suficientes necesidades de gasto, tanto de tipo civil como de tipo militar, como para compensar rápidamente con mayores importaciones el aumento del valor de las exportaciones. Son los países con gran capacidad de absorción. Otros, fundamentalmente los de la Península Arábiga, carecen de capacidad de absorción suficiente por muchas extravagancias que intenten. El resultado neto de todo ello ha sido que el excedente de los países productores de petróleo ha sido muy elevado inmediatamente después de un aumento de precio, aunque se ha ido reduciendo ulteriormente. En 1974, el excedente de la OPEP llegó a alcanzar la cifra de 60.000 millones de dólares, para irse reduciendo hasta sólo 6.000 millones de dólares en 1978. Esa cifra no es muy significativa, sin embargo, porque en 1979 se iniciaba una nueva ola de aumentos, que llevaron el excedente a cifras que habrán sobrepasado sin duda los 120.000 millones de dólares en 1980.

La contrapartida de esos excedentes en los países de la OCDE pasaba de un déficit de 28.000 millones de dólares en 1973 a un excedente de 6.000 en 1978, pasándose otra vez a cifras deficitarias en 1979, que alcanzaban la enorme magnitud de 73.000 millones de dólares en 1980. Pero el verdadero drama ha sido el de los países en vías de desarrollo no productores de petróleo, cuyos déficit han crecido constantemente, hasta llegar a unos 50.000 millones de dólares, ya que, por una parte, eran incapaces de proporcionar los bienes de equipo o armamentos que requerían los países de la OPEP, y por

otra, han sufrido de la disminución de la demanda global en los países de la OCDE.

Las políticas económicas de cara a la crisis

Esa disminución de la demanda global se ha debido mucho más a las políticas restrictivas seguidas por nuestros gobiernos que al impacto directo de la crisis. En 1973-74, el impacto directo sobre las importaciones del aumento de precio de los crudos era inferior al 2 por 100 del PNB de los países de la OCDE. En 1979-80, la cifra en dólares corrientes era mucho más elevada, pero el impacto en términos reales era parecido y también inferior al 2 por 100 del PNB. Aun olvidando que en el período intermedio entre esas dos bruscas subidas el precio del petróleo había disminuido en términos reales, nos encontramos que, en cualquier caso, el coste directo en términos de PNB anual de los dos grandes incrementos de precio de los crudos ha sido para el conjunto de la OCDE inferior al 4 por 100 del PNB de cada año. Esa cifra es algo inferior al crecimiento del PNB de la OCDE en un año normal, y no habría tenido, por tanto, mayor impacto que el de una pausa de un año en el crecimiento del nivel de vida en los países de economía avanzada. Pero la realidad ha sido mucho más grave. Entre 1973 y 1980, el PNB de los países de la OCDE ha crecido en una media anual del 3 por 100 comparable con el 5,5 por 100 observado en la década de los sesenta. Aun sabiendo de que existían otros factores exógenos tendentes a una desaceleración del crecimiento (algunos de los cuales hemos descrito en páginas anteriores), no cabe ningún lugar a dudas de que la desaceleración constatada se debe en gran parte a las políticas económicas aplicadas por los países de la OCDE como reacción a las crisis del petróleo. El razonamiento ha sido parecido en todos los países. Confrontados con un aumento de la inflación y un fuerte déficit de la balanza de pagos, cada país ha adoptado medidas restrictivas de la demanda interior con el objeto de reducir la primera y equilibrar la segunda. Considerando individualmente el caso de cada país, el razonamiento es de una lógica aplastante, y está además sostenido por esa gran ola monetarista que ha invadido la teoría económica en estos últimos tiempos como reacción al abuso de las tesis keynesianas. Pero no olvidemos que estas últimas tuvieron su mayor auge como consecuencia de la Gran Depresión y precisamente como reacción a tesis muy parecidas, a las que defiende actualmente el monetarismo, y que estaban llevando al mundo industrializado a la ruina. No olvidemos tampoco que, aunque estamos lejos de haber alcanzado las cifras de desempleo de aquella época, existen ya en la OCDE más de 23 millones de parados, que podrían llegar a unos 25 millones en el primer semestre de 1982, es decir, el 7,5 por 100 de la población activa.

Desde el punto de vista de la teoría económica, la situación actual presenta características suficientemente parecidas a las de la Gran Depresión como para que merezca la pena reflexionar sobre la adecuación de las políticas

económicas actuales. Como hemos visto en el caso de la hipótesis B, la redistribución de la renta mundial a favor de países con poca capacidad de absorción equivale a un aumento del ahorro mundial, puesto que las rentas se mantienen y el gasto disminuye. Ese aumento del ahorro no tendría por qué tener efectos negativos sobre el nivel de actividad si tuviera como contrapartida un aumento global de la inversión, que al no poder producirse en los países productores de petróleo con poca capacidad de absorción debería producirse en los países importadores. En un mundo más perfecto que el actual, parte de esa inversión debería hacerse en los países no productores de petróleo del tercer mundo mediante créditos, que deberían ser prácticamente a fondo perdido. Pero los productores de petróleo no han hecho más que algunos gastos simbólicos en ese sentido, y los países desarrollados tienen suficientes problemas de balanza de pagos como para lanzarse a un esfuerzo masivo de ayuda al desarrollo. Por tanto, la única solución realista podría haber consistido en un plan de inversiones concertado por parte de los países desarrollados importadores. Financiación no falta, puesto que los llamados «petrodólares» pululan por los mercados financieros internacionales en busca de prestatarios solventes. Tampoco faltan oportunidades de inversión. Uno de los problemas que han retrasado la sustitución del petróleo por otras fuentes de energía o simplemente el ahorro energético ha sido precisamente la importancia de las inversiones necesarias. La energía nuclear, el carbón o incluso la energía solar requieren inversiones mucho más importantes que las que implicaba la utilización del petróleo. Lo mismo ocurre con los programas de ahorro energético que requieren el cambio o la adaptación de procesos productivos, aislamientos que encarecen la construcción de inmuebles, etc. Un amplio programa de inversiones en sustitución del petróleo y ahorro energético habría sido útilísimo tanto desde el punto de vista energético como del de mantenimiento de la demanda global. Pero existen otros tipos de problemas que han impedido hasta ahora adoptar una solución concertada y que clasificaremos en tres categorías.

En la primera categoría se encuentran las clásicas actitudes nacionalistas que dieron lugar a las políticas de *beggar thy neighbour* durante la Gran Depresión. Confrontado con un déficit de balanza de pagos, un país intentará siempre resolver su problema reduciendo su demanda interior, y en algunos casos mejorando su ventaja competitiva mediante una depreciación de su moneda. Afortunadamente, los grandes países no han recurrido a este último recurso en la época actual, aunque sí se han incrementado las prácticas proteccionistas de diversos tipos y desde luego se han generalizando las políticas de restricción de la demanda. Es evidente que un país aislado no puede hacer otra cosa que restringir su demanda interior si los demás países lo hacen, porque en caso contrario su balanza de pagos se deterioraría de forma insostenible. Pero, como vimos anteriormente, el conjunto de los países desarrollados no gana casi nada con una restricción global de su demanda, porque sólo consigue reducir marginalmente su consumo de petróleo y, por tanto, su déficit global, que se debe exclusivamente a los pagos por ese producto.

Ahora bien: mientras no exista un acuerdo global para conseguir esa actuación concertada, seguirá cada país intentando resolver los problemas por su cuenta. Algunos, los más fuertes, lo conseguirán, pero será a expensas de los más débiles, sean desarrollados o subdesarrollados, y en detrimento de la solidaridad internacional.

Lo que ocurre, y ello nos lleva a la segunda categoría de problemas, es que la ola de conservadurismo económico que ha invadido el mundo impide que los análisis de tipo global como el que aquí se ha hecho sean suficientemente aceptados como para incidir en la opinión pública y llevar a los políticos a intentar algo diferente de la ortodoxia del momento. Keynes se ha convertido en una especie de enemigo al que se imputan todos los excesos de la burocracia socialdemócrata, olvidándose que Keynes fue un liberal políticamente muy activo y que sus políticas de sostenimiento de la demanda son perfectamente compatibles con principios liberales. El monetarismo, que es en gran parte un retorno a la Escuela de Salamanca del siglo xvii, niega toda una serie de avances de la teoría económica, y sobre todo basa sus teorías en un modelo de comportamiento que ha dejado de existir en muchos países occidentales, aunque sea aplicable en algunos. Simplificando al máximo, la teoría que relaciona directamente la inflación con el crecimiento de la oferta monetaria implica que, al restringirse la oferta de medios de pago en la economía, se ajustará a la baja el nivel de precios hasta acomodarse a esa oferta. Admiten los monetarismos que ese ajuste tardará en producirse, puesto que primero deberán desaparecer las expectativas inflacionistas que son fruto de los «excesos» del pasado. Entre esos «excesos», muchos monetaristas colocan los comportamientos sindicales (lo que les lleva a desear la supresión de los sindicatos), los comportamientos del sector público (lo que además de una encomiable restricción del despilfarro les lleva a pedir una menos encomiable reducción de transferencias esenciales como pensiones, etc.) y toda esa serie de reivindicaciones que llevan a los distintos grupos sociales en los países democráticos a intentar conseguir una parte del pastel económico global mayor que la que tienen. En el mundo de su teoría, toda esa serie de rigideces e inelasticidades quizá no debería existir (aunque cabe preguntarse si en ese mundo se habrían conseguido las cotas de igualdad económica que han asegurado el triunfo del capitalismo), pero en el mundo real existen, y ello nos lleva a la tercera categoría de factores que impiden una política concertada de lucha contra la crisis en las sociedades avanzadas.

La tercera categoría está compuesta de todos esos factores que han provocado una crisis de convivencia en nuestras sociedades. El «Estado beneficencia» ha tenido una trágica contrapartida en el abandono del esfuerzo como factor básico de supervivencia. La búsqueda de la igualdad ha conducido a un menosprecio de la competitividad, sin la cual ninguna especie biológica puede sobrevivir a las leyes inexorables de la selección natural. Cuando el resto del mundo nos ha impuesto un sacrificio en términos de rentas, que en el fondo sólo se cifra en el 4 por 100 de las rentas más altas del mundo, nuestra respuesta ha sido rechazar el sacrificio e intentar trasladar a otros

la carga que se nos imponía. El resultado ha sido que a los aumentos de precios han respondido aumentos de salarios y, a su vez, nuevos aumentos de precios, que relanzaban la espiral inflacionista. Y ese factor ha pesado aún más que el déficit de balanza de pagos en las políticas restrictivas adoptadas por las autoridades económicas de todos los países.

Evidentemente, los comportamientos no han sido iguales en todas partes. La gran lección de la crisis ha sido precisamente que no se han defendido mejor los países que disponían de más recursos energéticos, sino aquellos que gozaban de mayor consenso social. Alemania, Japón o Suiza, países extremadamente desfavorecidos por la naturaleza en materia energética, tienen en estos momentos las tasas de desempleo más bajas de todo el mundo industrializado. Alemania y Suiza lo han conseguido en parte exportando desempleo o, al menos, cerrando la entrada de inmigrantes. Pero no así Japón, o incluso países pequeños y aún más desfavorecidos, como Taiwan, Singapur o Corea.

Si recordamos que entre 1973 y 1980 los países de la OCDE han perdido un total de 17 puntos de crecimiento (total de la diferencia entre el crecimiento que habrían conseguido con el ritmo anual anterior a la crisis y el que han conseguido en realidad), y que de esa diferencia sólo 4 puntos se deben al impacto directo del aumento del precio del petróleo, creo que vale la pena reflexionar. Con sus comportamientos insolidarios, las poblaciones de los países avanzados sólo han conseguido agravar un mal que en el fondo no era muy importante. Y, como veremos en la última sección de este ensayo, de su capacidad de vencer sus propias contradicciones dependerán las posibilidades de superar definitivamente la crisis.

Análisis prospectivo

En un estudio dirigido por el profesor Emilio Fontela y publicado por el Instituto Nacional de Prospectiva⁴ se alcanza una serie de conclusiones sobre las perspectivas energéticas mundiales que resumiremos aquí brevemente.

Las reservas comprobadas de petróleo se cifran en treinta y dos años de consumo, pero están ampliamente subestimadas y en realidad deben ser del orden de setenta años de consumo. Los recursos (estimación de las cantidades totales recuperables) oscilan, según las estimaciones, entre cien y doscientos años de consumo (que quedarían reducidos a cien si estimamos un crecimiento lento de la demanda). Los recursos de petróleos no convencionales (aceites pesados, arenas asfálticas, esquistos bituminosos) son superiores a los de petróleo convencional, aunque requerirán inversiones muy importantes para su extracción. Los recursos de gas natural son también elevados, casi tanto como los de petróleo convencional. Con inversiones adecuadas tendría-

⁴ *Estudio de prospectiva sobre la situación energética mundial a medio y largo plazo*, Instituto Nacional de Prospectiva, Madrid, octubre 1979.

mos, pues, hidrocarburos suficientes para varios cientos de años de consumo, aunque están concentrados en gran parte en los países de la OPEP y presentan, por tanto, riesgos políticos de abastecimiento.

Si pasamos al carbón, las estimaciones varían enormemente entre recursos totales (cuatro o cinco veces superiores a los hidrocarburos) y los que pueden ser recuperados económicamente, que sólo son algo superiores a las reservas comprobadas de hidrocarburos. Todo dependerá de las nuevas técnicas que se están experimentando (en materia de gasificación, por ejemplo). Sin embargo, a plazo medio, el carbón constituye un importantísimo complemento del petróleo.

La tecnología clásica de la fusión nuclear está muy limitada por las reservas de uranio, y sólo permite una producción total de energía comparable a las reservas comprobadas de petróleo. Pero también es a medio plazo un complemento importantísimo y puede multiplicarse con el uso de los sobre-regeneradores, cuyo consumo de uranio es cien veces menor.

La fusión nuclear es todavía un sueño lejano. Lo es menos la utilización de energía solar o de biomasa, pero éstas serán todavía marginales como fuentes de aprovisionamiento durante muchos años.

La conclusión global es que, a largo plazo, la producción mundial de energía no está limitada por los recursos, aunque puedan producirse desajustes a corto y medio plazo, fundamentalmente como consecuencia del desigual reparto geográfico de la oferta.

Si la situación energética no es limitativa del crecimiento económico a largo plazo, pero pueden producirse desajustes a corto y medio plazo, la solución preconizada de un programa masivo de inversiones en energías sustitutorias del petróleo y en ahorro energético parece tan indicada desde el punto de vista energético como lo era desde el punto de vista del sostenimiento de la demanda global.

Hemos visto igualmente que no existen contraindicaciones globales en lo que concierne a la balanza de pagos, puesto que a plazo medio termina produciéndose el ajuste por la vía de mayores importaciones de los países productores de petróleo y a corto plazo éstos se ven obligados a financiar el déficit de los países avanzados, simplemente porque éstos constituyen el único lugar en el que pueden invertir sus activos financieros⁵.

El problema se aplica a cada país tomado individualmente, pero con un sistema de cambios flotante, mecanismos de ayuda financiera mutua y el

⁵ Esta cuestión quizá merezca explicación más detallada para el lego en cuestiones monetarias internacionales. Cuando un Estado árabe recibe dólares en pago de su petróleo, esos dólares constituyen, por definición, un pasivo del sistema monetario americano. Al haber desaparecido la convertibilidad en oro, el Estado en cuestión no tiene más recurso que mantener sus activos líquidos en los Estados Unidos, transferidos a otra moneda (en cuyo caso siguen siendo un pasivo del grupo de la OCDE, porque no existe ningún otro centro financiero suficientemente desarrollado) o convertirlos en activos financieros (acciones y obligaciones) o bienes inmuebles, que también estarán casi siempre en países de la OCDE. Es decir, que el dinero siempre se queda en los países desarrollados y, por tanto, la financiación del déficit *global* está asegurada automáticamente.

funcionamiento de los Euromercados; los problemas de cada país son perfectamente solubles si las políticas individuales no discrepan mucho del conjunto.

Queda, por último, la cuestión de la inflación, que hemos atribuido en gran parte a conflictos entre grupos sociales para mantener o aumentar sus respectivas participaciones en la renta global. Ese es, en nuestra opinión, el meollo de la cuestión.

Hemos constatado el fracaso de las prácticas económicas socialdemócratas al final de un período durante el cual demostraron sin duda una extraordinaria utilidad para igual la situación económica de los distintos grupos sociales y permitir un acercamiento a la síntesis libertad-igualdad, que es la búsqueda constante de todo sistema democrático. La utilización excesiva del aparato del Estado y la postergación de la iniciativa privada han sido probablemente las principales causas de ese fracaso relativo.

Estamos asistiendo al fracaso de las doctrinas neoliberales en la medida en que el abandono del keynesianismo nos está llevando a una situación de desempleo cada vez menos tolerable. Estamos aprendiendo que el proceso de ajuste monetarista es mucho más doloroso en ausencia de consenso social de lo que pretenden sus defensores.

Sin embargo, del mismo modo que el enfoque keynesiano consiguió mayores cotas de bienestar y de aceptación social del sistema durante muchos años, el enfoque neoliberal tiene enormes ventajas en la medida en que en una situación de cambios profundos en la estructura de precios relativos y de necesidad de importantísimos reajustes de la oferta los mecanismos de mercado son imprescindibles si se quiere llevar a cabo racionalmente el proceso.

Debemos encontrar una síntesis entre ambos enfoques. Los valores de equidad y de intervención global sobre la economía con fines fundamentalmente macroeconómicos son perfectamente combinables con la agilidad de ajuste de la oferta en un mundo cambiante. Esa síntesis se encontrará en un liberalismo progresista que sepa utilizar el mercado en lo que tiene de eficiente y la intervención estatal en lo que tiene de indispensable. Un progresismo que no caiga en la clásica trampa de interpretar todo lo que es público como progresista y todo lo que es privado como reaccionario en una época en la que la defensa de las libertades individuales contra la opresión de las grandes organizaciones, sean privadas o estatales, es a menudo primordial. Un progresismo que no interprete que lo público debe ser siempre estatal y burocrático, porque lo público en una sociedad de libertades, debe ser, ante todo, asociativo y comunitario.

La definición de un sistema económico liberal progresista sobrepasaría con mucho el objetivo de estas notas sobre la crisis económica. Baste apuntar a guisa de conclusión que la crisis de convivencia, que es en nuestra opinión la principal causante de la crisis económica, deberá vencerse mediante una transformación profunda de las relaciones sociales en la que se combine la máxima libertad individual con un mayor sentido de la responsabilidad comunitaria. Es posible que los sistemas políticos occidentales no hayan comprendido que ambas actitudes se potencian mutuamente y que un ciudadano más

libre puede ser también un ciudadano más responsable si se le informa plenamente.

Si conseguimos esa síntesis, y creo que la evolución política y cultural de las democracias avanzadas va en esa dirección, no hay razón alguna para el pesimismo. La década de los ochenta nos verá probablemente vencer a la crisis energética e iniciar una nueva etapa de progreso con formas de desarrollo más cualitativas, menos despilfarradoras, en cierto modo, menos materialistas y más humanas. A ello contribuirá la revolución tecnológica ya confirmada de la telemática, que permitirá repartir los centros de decisión y de producción, automatizar los procesos y dedicar al ser humano en las sociedades avanzadas a actividades en las que el esfuerzo intelectual primará cada vez más sobre el esfuerzo físico.

Casi todo lo que aquí se ha dicho es aplicable a la situación española. La principal diferencia entre la crisis económica española y la del resto de los países de la OCDE radica en la intensidad de la crisis y no en su naturaleza. España tiene, con un 12,5 por 100, la tasa de desempleo más alta de los países avanzados. España ha sido también el país en el que la crisis de convivencia ha sido mayor, porque la crisis ha coincidido con un proceso de transformación política en el que debían cuestionarse estructuras básicas de la sociedad española, y se cuestionaron también principios básicos de supervivencia.

A la inevitable pérdida de nivel de vida causada por el aumento de precios de los crudos, la clase obrera española respondió exigiendo y consiguiendo aumentos iniciales de nivel de vida que se pagaron más tarde con una inflación galopante. A la necesidad de adaptarse y competir en las nuevas circunstancias, la clase empresarial española respondió con miedo al futuro y re-troceso en la inversión. A la obligación de facilitar los cambios de estructura y definir objetivos de progreso, la clase política española respondió con cobardía, malthusianismo y desesperanza.

Una vez normalizadas las relaciones de convivencia política y efectuados algunos de los indispensables cambios estructurales (implantación de sindicatos laborales y patronales, reforma fiscal, etc.), la situación española se va pareciendo cada vez más a la de los demás países, aunque con el *handicap* de un deterioro inicial que será necesario compensar. La esperanza es también aquí posible.

E. M. *

* 1937. Director adjunto del Departamento Económico de la OCDE.